

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN - SALA LABORAL
Medellín, dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto
Exp. 019-2022-00093-01

Cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede la Sala Quinta de Decisión Laboral, a resolver el recurso de apelación interpuesto por AXXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A, frente al auto que negó el decreto de una prueba, dentro del proceso ordinario laboral que adelantó MARIA EDUVIGIS CASTAÑEDA MONTOYA en su contra y de COLPENSIONES y la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA.

ANTECEDENTES:

La demandante puso en marcha este proceso, con el fin de obtener de Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, previa declaratoria de nulidad de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral expedidos por AXXA Colpatria Seguros de Vida S.A y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, con el correlativo pago de intereses moratorios y las costas del proceso.

Al contestar la demanda, Axxa Colpatria S.A solicitó, para dar fuerza a su estrategia de defensa, se decretara como prueba el que el representante legal de Colpensiones rindiera informe escrito respecto de las preguntas que le serían puestas de presente en la etapa oportuna (Pág. 10 Archivo 14).

Al realizar la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS, el juzgado de conocimiento, que lo es el Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, negó el decreto de ese elemento de convicción (Min 16:26 Archivo 21), poniendo en evidencia que con la información suministrada por la entidad en su escrito de

respuesta y el certificado emitido por el Comité de Conciliación de la entidad podía obtenerse respuesta a las inquietudes que fueron determinadas en el memorial que se subsanaron requisitos (Archivo 16). (Min 16:40 Archivo 21).

La convocada a quien se le negó la prueba interpuso el recurso vertical contra tal determinación, por no compartir la posición del Despacho en tanto advierte la utilidad, pertinencia y conducencia del informe pedido para efectos de la carga probatoria de la sociedad, aduciendo que no se logra desvirtuar con la documental obrante en el expediente que en efecto el dictamen elaborado por el perito haya sido tenido en cuenta por Colpensiones. Tampoco se desprende la entidad a cargo de quién está el reconocimiento de la pensión de invalidez en caso de tener una pérdida de capacidad laboral del 50%, por lo que se busca respuesta a los hechos debatidos y que le conciernen a la administradora.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Sea lo primero destacar que la Sala es competente para resolver el asunto, dado que el auto recurrido se encuentra regulado en el numeral 4 del artículo 65 del CPTSS. Luego, y a partir de los antecedentes, el problema jurídico consiste en determinar si debe revocarse la determinación del *a quo* de no decretar la prueba pedida por la codemandada, lo que dependerá si se reúnen los presupuestos de la regulación adjetiva para el decreto del elemento persuasivo.

Pues bien, el artículo 168 del CGP aplicable por remisión analógica permitida por el 145 del CPTSS, prescribe que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles, lo que en igual sentido prescribe el artículo 53 del CPT y de la SS. Última característica definida por el tratadista Hernán Fabio López Blanco, a partir de la utilidad de la prueba indicando que: *“... se entiende por utilidad de la prueba el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que*

*determinada prueba conlleva*¹. Por manera que, si con las pruebas que reposan en el plenario, en sentir del juzgador, resulta suficiente para lograr el convencimiento necesario con el fin de tomar una decisión de fondo, considerando que otros elementos de convicción no aportarían al esclarecimiento de los hechos objeto de debate, estos últimos pueden ser rechazados.

En ese orden, no es mucho lo que hay por decir para definir que la prueba pedida no debe ser decretada. Y ello es así porque tal medio de convicción es superfluo de cara a los fines probatorios del pleito y a lo que le compete demostrar a Axxa Colpatria S.A con su futura práctica. Es verdad que el artículo 275 del CGP da la posibilidad que a petición de parte el Juez solicite informes a entidades públicas sobre hechos o actuaciones que resulten de sus archivos o registros, pero es que a partir de este vestigio según se desprende del escrito de oposición subsanado (Archivo 16), lo que busca la ARL convocada es que Colpensiones exponga: 1) Si la demandante ha presentado reclamación para obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez; 2) Si de ser afirmativa la respuesta anterior, se tuvo en cuenta el dictamen elaborado por Axxa Colpatria S.A.; 3) Si conforme a la documental con la que cuenta la entidad es posible determinar a cargo de quién estaría el reconocimiento de la pensión; y 4) si Colpensiones tuvo conocimiento del dictamen elaborado por Jaime León Londoño Pimienta.

En ese orden, asiste razón al titular de la primera instancia, en tanto esa información es posible obtenerla de la documental que reposa en el plenario, pues ella denota que en efecto la reclamación fue realizada a la entidad, constancia que se verifica con las pruebas arribadas con la demanda (Págs. 250 Archivo 02) y también reposa en el expediente administrativo de la entidad como realizada en noviembre de 2021 por medio de correo certificado (págs. 499-504 Archivo 11), sin que ésta convocada alegara una falta de agotamiento de la reclamación como requisito previo a la presentación de la demanda. Igualmente al ser ausente dentro del proceso el acto administrativo resolviendo la solicitud, da cuenta de la abstención por parte de la entidad de un pronunciamiento de fondo al respecto, para detectar el análisis realizado en el marco de los dictámenes cuestionados, pero se cuenta con el Certificado de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial (Archivo 18) de donde se desprende el juicio de la

¹ Código General del Proceso, Pruebas, Tomo 3, página 112, edición 2017.

entidad frente a la pensión pedida, partiendo de los dictámenes emitidos por Axxa Colpatria S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia, siendo claro que la experticia que se pretende hacer valer ante el Juez del Trabajo para derruir la validez de los emitidos por las entidades calificadoras mencionadas, fue puesta en conocimiento de los interesados dentro de la presente litis, encontrando que en efecto la información que se busca satisfacer por medio de este mecanismo probatorio se encuentra suficientemente suministrada en el trámite.

Es preciso aclarar en virtud a lo buscado con el punto tercero, que algún concepto que la entidad pudiera emitir bajo su percepción jurídica y defensa propia, no se constituye en un elemento de prueba útil y pertinente, y en ese orden ninguna valoración merecería para poder definirse en derecho la situación concreta del actor.

De cualquier modo, las inquietudes planteadas a ningún resultado de certidumbre llevan, porque con la ilustración de parte de la administradora del RPMPD en los términos detallados, en nada modifica el panorama del actor para sugerir sobre su necesidad, ya que más allá de reiterar información ya integrada en este escenario, y de emerger un concepto técnico de parte de Colpensiones acorde a sus políticas de funcionamiento dentro del Sistema de Seguridad Social en pensiones, ningún nivel de veracidad otorga para dar validez a uno u otro dictamen que es lo que finalmente interesa a este proceso, para en último lugar decidir sobre la causación del derecho prestacional por invalidez perseguido.


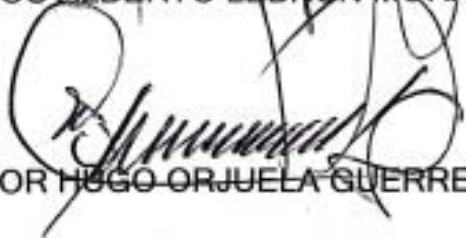
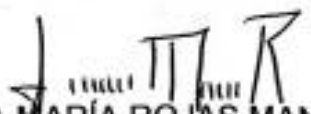
En suma, esta prueba atendiendo el propósito del litigio no resulta idónea, relevante, útil, ni pertinente, porque además de tenerse la información clamada, no sirve de báculo para ninguna verificación de cara a los intereses de Axxa Colpatria S.A, por lo que al no avizorarse argumentos fácticos o jurídicos que permitan el decreto de la prueba solicitada por la pasiva, se confirmará el auto gravado.

Siguiendo los lineamientos del artículo 365-3 del CGP, costas en esta instancia a cargo de Axxa Colpatria S.A. y a favor de la demandante. Como agencias en derecho se fija la suma de \$1.160.000.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto que negó el decreto de una prueba, de fecha y procedencia conocidas. Costas en esta instancia a cargo de Axxa Colpatria S.A, se fijan como agencias en derecho la suma de \$1.160.000.

Los Magistrados,


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Se certifica: Que la sentencia anterior fue notificada por
ESTADOS N° 47 fijados el 17 de marzo de 2023
En la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El secretario.